

Ex comandante del Batallón Palacé, uno de los 20 militares investigados por masacre de Trujillo en Colombia

El tiempo Jueves 2 de octubre de 2008



Víctimas han protestado por la impunidad en este caso.

Además del coronel Hernán Contreras, también es buscado el coronel Wilfredo Ruiz, otro oficial que hizo parte del batallón durante la época.

El coronel Alirio Urueña, que por ese tiempo era mayor y jefe de operaciones de esa unidad militar, está preso y ya fue llamado a juicio para que responda por homicidio con fines terroristas. Todos están retirados.

La aparición de otros dos oficiales del Batallón Palacé en el expediente de Trujillo confirma las denuncias que desde un primer momento hicieron sobrevivientes y familiares de las víctimas de ese crimen: que algunos oficiales colaboraron con las bandas de sicarios del cartel del Norte del Valle.

Por estos asesinatos, de los que habrían sido víctimas entre 240 y 350 personas, el Estado colombiano recibió una de sus primeras sanciones ante el Sistema Interamericano de Justicia.

Para la Fiscalía, un antecedente inmediato del recrudecimiento de los crímenes de los narcos en Trujillo fue la muerte de 7 miembros del Palacé a manos de guerrilleros del Eln, que los atacaron el 29 de marzo de 1990.

A partir de ese momento, señala el expediente, la alianza criminal que existía en la región se fortaleció.

La investigación dice que, en casos como el de los hermanos Cano Valencia, tres de

las víctimas de Trujillo, "se puede afirmar sin lugar a equívocos que los victimarios sí eran miembros activos de la Fuerza Pública, en concreto del Ejército Nacional".

La Fiscalía, con los testimonios que la justicia dejó dormir por décadas, con nuevas declaraciones de sobrevivientes y con sus propias averiguaciones, concluyó: "miembros del Ejército pertenecientes al batallón Palacé de la ciudad de Buga llevaban a cabo ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias de personas presunta o verdaderamente vinculadas a la guerrilla". Y que para esos planes "contaban con el apoyo de grupos paramilitares patrocinados" por los capos del norte del Valle.

El testigo estrella en el caso, Daniel Arcila, quien fue asesinado poco después de que empezó a colaborar con la justicia, en 1991, era informante del Palacé.

Testigos relataron que las tropas se movían por las mismas zonas en las que actuaban, sin ningún contratiempo, las bandas de sicarios de los narcos Orlando Henao, Diego Montoya y Henry Loaiza, 'El Alacrán'.

Tal como lo reveló EL TIEMPO la semana pasada, la Fiscalía solicitó a los organismos de seguridad la detención de 12 ex miembros del Ejército y la Policía que tenían jurisdicción en el norte del Valle ; de dos ex funcionarios públicos y de seis reconocidos paramilitares de la zona.

Los fiscales revisan versiones según las cuales se habrían usado camiones y armamento oficial para cometer los crímenes.

Algunos testigos dijeron, incluso, que algunos desaparecidos fueron llevados hasta la guarnición en Buga y que desde entonces se perdió su rastro.

Fuentes judiciales explicaron que la Fiscalía está trabajando de la mano con el Ejército para la ubicación de estas personas requeridas por la justicia, pero que hoy están retiradas del servicio activo.